



Rama Judicial de Colombia

Juzgado Segundo Penal del Circuito  
para Adolescentes con Función  
de conocimiento de Villavicencio

Villavicencio (Meta), tres (3) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Tutela 1ª Instancia  
Radicado: 50001 31 18 002 2024 00119 00  
Accionante: MIGUEL FERNEY LEYTON CÉSPEDES  
Accionado: LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS

## Sentencia No. 234

### 1. ASUNTO POR RESOLVER

Procede el despacho a resolver la acción de tutela instaurada por **MIGUEL FERNEY LEYTON CÉSPEDES**, en contra de **LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS**, por la presunta vulneración a los derechos fundamentales a la salud, seguridad social e igualdad.

### 2. HECHOS

Afirma el accionante que el día 24 de febrero de 2024, sufrió un accidente de tránsito mientras iba en calidad de conductor en la motocicleta de placas NNM 33E, vehículo que contaba con la póliza de seguro obligatorio SOAT vigente con póliza No. AT 2508004316397000, por lo que, en atención a la afectación de su salud, no puede desarrollar las mismas actividades normales, convirtiéndose ello en un limitante.

Agrega que se encuentra afiliado al régimen contributivo en salud, y tiene gastos personales que le impiden costear la valoración médica en la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, razón por la que se ve obligado a elevar la acción de tutela para que no se vulneren sus derechos fundamentales.

Aunado lo anterior, refiere que el día 17 de octubre de 2024, elevó derecho de petición ante **LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS**, solicitando determinar en primera oportunidad la valoración de la pérdida de capacidad laboral y que de no ser posible, que proceda a pagar ante la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL META; que la entidad accionada

mediante correo electrónico de fecha 22 de octubre de 2024, dio respuesta, indicando que para iniciar el análisis de una reclamación por incapacidad permanente, requiere entre otros documentos, el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, lo cual considera incoherente, pues precisamente eso es lo que solicita a través de la acción de tutela.

Finalmente señala que se rehúsa a continuar con el tratamiento médico, y solicita se tutelen los derechos que reclama y se ordene a la aseguradora **LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS**, que sufrague los gastos por concepto de honorarios profesionales de la Junta de Calificación de Invalidez del Meta, y que se proceda de la misma manera si es del caso ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

### 3. DE LAS PARTES

**3.1. ACCIONANTE: MIGUEL FERNEY LEYTON CÉSPEDES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.110.489.812, recibe notificación en el E-MAIL: [gygasesoresconsultoresabogados@gmail.com](mailto:gygasesoresconsultoresabogados@gmail.com), celular: 3212967811.

**3.2. ACCIONADA:** Se trata de **LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS.**, ubicada en la Carrera 39 N°35-49 Barrio Barzal de esta ciudad, teléfono 6626555, e-mail: [notificacionesjudiciales@previsora.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@previsora.gov.co); [contactenos@previsora.gov.co](mailto:contactenos@previsora.gov.co).

### 4. ELEMENTOS PROBATORIOS ALLEGADOS

El accionante, allegó en fotocopia, los siguientes documentos:

- Derechos de petición Radicados con su respectivo envío y respuestas emitidas por PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.
- Cédula de ciudadanía, certificado de ocurrencia e historia clínica del siniestro.
- Jurisprudencia fundamento de la Petición.
- Administradora de los Recursos del SGSSS – ADRES.
- Fallo análogo emitido por el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, rad. 50001310500320241000800.
- Fallo análogo emitido por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES DE VILLAVICENCIO, rad. 50001311800120240000300.

- Fallo análogo emitido por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO rad. 50001-33-33-008-2024-00024-00.
- Ley 100 de 1993 – gestor normativo.
- Sentencia T-716-17 de la Corte Constitucional de Colombia.
- Ley – 2213 de 2022.
- Sentencia T-003-20 Corte Constitucional de Colombia.
- Sentencia T-400-17.
- Sentencia no. radicado 50001312100120241007300 del 2024.
- Circular Externa No. 09 calificación en primera oportunidad SOAT.
- Concepto Jurídico 201611401553011 DE 2016 1.
- Sentencia T-401-94 Corte Constitucional de Colombia.

La accionada allegó:

- Poder general

## 5. DEL TRÁMITE

Mediante auto de fecha 21 de noviembre de 2024, se admitió la presente acción de tutela y se corrió traslado al Representante Legal de **LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS**, para que ejerciera el derecho de defensa y de contradicción, siendo debidamente notificado en la misma calenda a través de correo electrónico.

El día 25 de noviembre de 2024, se corrió traslado de la respuesta emitida por la entidad accionada al actor, sin que hasta la fecha allegara pronunciamiento alguno al respecto.

## 6. DE LA RESPUESTA A LA TUTELA

**6.1. LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS**, a través del apoderado ALBERTO PULIDO RODRÍGUEZ, actuando conforme poder otorgado por el Representante Legal, alude que a su poderdante no le constan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se generó el siniestro, además solicitó que no se acceda a la petición del accionante, toda vez que es el accionante quien debe cumplir con los requisitos que exige la ley para la reclamación de los beneficios del SOAT.

Agrega que se opone a la prosperidad de la tutela, pues esa entidad no está vulnerando derecho alguno a la parte accionante, en atención a que la persona que pretende el pago de los honorarios ante las Juntas de

Calificación, debe demostrar que se encuentra en imposibilidad económica de hacerlo.

Finaliza solicitando se declare la improcedencia de la acción ya que no existe prueba alguna que demuestre la imposibilidad económica para financiar un potencial dictamen ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

## 7. COMPETENCIA

Compete a este Despacho conocer la presente Acción de Tutela, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, los Decretos Reglamentarios 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000; Decreto único Reglamentario 1069 de 2015 y las modificaciones que sobre éste se implementaron a través de los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

## 8. CONSIDERACIONES

### 1. Naturaleza jurídica

La presente acción de amparo es regulada por nuestra Constitución en el artículo 86, precisando que toda persona en todo momento y lugar, puede reclamar ante los jueces, a través de este medio preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados.

Y por su naturaleza debe caracterizarse por ser: **Subsidiaria**, en cuanto no procede cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho invocado. **Informal**: toda vez que se tramitan por esta vía, las vulneraciones o amenazas de los derechos fundamentales que, por su trascendencia, no requieren la confrontación propia de un proceso ordinario ante la judicatura y **Residual**: en la medida en que complementa a aquellos medios previstos en el ordenamiento que no son eficaces para la protección del mismo.

En nuestro caso es viable dar trámite a la presente, en tanto se reúnen estas exigencias, luego entraremos a verificar si es procedente acceder a la solicitud de protección de los derechos a la salud, seguridad social e igualdad. reclamados por **MIGUEL FERNEY LEYTON CÉSPEDES**.

Para accionar este mecanismo judicial se han establecido unos requisitos: i) **legitimidad en la causa por activa**, en esta oportunidad, se encuentra demostrada, por cuanto el petente dio impulso a esta acción de manera directa, ii) **legitimidad por pasiva**, se trata de la entidad **LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS**, que es una sociedad de economía mixta de carácter nacional, cuyas actuaciones pueden ser debatidas por este medio, atendiendo la naturaleza de la reclamación que en este evento es por derechos de carácter fundamental, iii) la **subsidiariedad**, el caso atañe a una controversia relacionada con un contrato de seguros, cuyo debate en principio, esta debería ser resuelto por la jurisdicción ordinaria civil, en tanto el Legislador previó la posibilidad de acudir a varias clases de procesos judiciales los cuales se encuentran previstos en el Código General del Proceso y dependen del tipo de controversia originada en la relación contractual y jurídica de aseguramiento. **Sin embargo, la Corte Constitucional en abundante jurisprudencia, ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela para pronunciarse sobre controversias surgidas con ocasión del contrato de seguro**<sup>1</sup>, y en esta ocasión como ya se indicó, da lugar a su estudio, pues el accionante se ha tenido que someter a varios tratamientos para recuperar su salud y iv) **la inmediatez**, se puede observar que el derecho de petición lo presentó el accionante el día 17 de octubre de 2024, por lo que se considera que el requisito se cumple, ya que la acción se presentó dentro de un término razonable.

### **Planteamiento jurídico**

Corresponde al juzgado establecer si **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS** vulneró al señor **MIGUEL FERNEY LEYTON CÉSPEDES**, los derechos fundamentales a la salud, seguridad social e igualdad, al no haber sufragado los honorarios ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta y de ser necesario sufragar los de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

**Para resolver el enunciado planteado**, traeremos a estudio algunos fallos que la Corte Constitucional ha emitido en cuanto a los honorarios y la competencia de la Junta de Calificación de Invalidez, para llegar a determinar y calificar la pérdida de capacidad laboral.

---

<sup>1</sup> Sentencia T-003 de 2020

## 1. Competencia y honorarios que corresponden a la Junta de Calificación de Invalidez.

Como precedente jurisprudencial la Corte Constitucional a través de sentencia T-045/13, indicó:

*"...Los miembros de la Juntas también tienen derecho a que su actividad sea remunerada, en ese sentido, la Ley 100 de 1993 indica en sus artículos 42 y 43, que tales honorarios les corresponde asumirlos a la entidad de previsión social a la que se encuentre afiliado quien solicita el servicio. De la misma manera, el Decreto 2463 de 2001 señala que las remuneraciones de las Juntas están a cargo de la entidad de previsión social, la sociedad administradora a la que se encuentre afiliado el solicitante, la compañía de seguros, el pensionado por invalidez, entre otros, y que si, dado el caso, el interesado es quien asume los costos generados por este trámite, tiene derecho a que esos dineros sean reembolsados. Bajo ese entendido, queda claro que según lo señalado por la ley y la jurisprudencia de este tribunal, las Juntas de Calificación de Invalidez, tienen derecho a recibir el pago de sus honorarios; sin embargo, va en contra del derecho fundamental a la seguridad social exigir a los usuarios asumir el costo de los mismos como condición para acceder al servicio, pues son las entidades del sistema, ya sea la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado el solicitante, el fondo de pensiones, la administradora o aseguradora, la que debe asumir el costo que genere este trámite, para garantizar de manera eficiente el servicio requerido..."* Subrayado fuera de texto.

De otra parte, en sentencia T-322 de 2011, señaló:

### **"INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE A CARGO DEL SOAT**

*En cuanto al derecho de petición, se observa que la respuesta emitida por la accionada cumple con los requisitos establecidos por la doctrina constitucional, ya que constituye una respuesta oportuna, de fondo y el peticionario fue debidamente notificado. Sin embargo, no se puede dejar de lado que con su contestación desconoció que la norma aplicable al asunto también extiende la carga de cancelar los honorarios de la Junta de Calificación de Invalidez en su calidad de compañía de seguros y no sólo corresponde al aspirante a beneficiario como pretendió hacerlo entender. Hecho que confluyó en que a la actora le fuera cercenado su derecho a la seguridad social, puesto que se obstaculizó su acceso a las prestaciones ofrecidas por el SOAT, tal como lo es la indemnización por incapacidad permanente."* (Subrayado fuera de texto)

Conforme a lo anterior, es claro concluir que ciertamente es un deber legal de las aseguradoras asumir el valor correspondiente a los honorarios ante las Juntas de Calificación a fin de establecer el porcentaje de invalidez de las personas afiliadas, a quienes no se les puede transferir la carga de ese emolumento.

Sin embargo, jurisprudencialmente se ha establecido que el deber de realizar en primera oportunidad la valoración para establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, corresponde a las aseguradoras, dictamen que podrá ser objeto de revisión por parte de la Junta Regional de Calificación

de Invalidez, como quiera que es la facultada para emitir ese tipo de certificación, sobre el tema la Corte Constitucional ha establecido:

*“Se concluye que, para acceder a la indemnización por incapacidad permanente amparada por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, es indispensable allegar el dictamen médico proferido por la autoridad competente. Además, es importante aclarar que la decisión proferida en una primera oportunidad por las autoridades establecidas en el inciso segundo del Artículo 41 de la Ley 100, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, podrá ser impugnado ante las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la calificación emitida por esta, a su vez, podrá ser objetada ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.”*

Atendiendo lo señalado, se puede concluir que las Juntas de Calificación de Invalidez son las encargadas de emitir los dictámenes de la pérdida de capacidad laboral, cuando las personas requieran obtener el pago de incapacidades; estos honorarios deben ser cancelados por la entidad de previsión o seguridad social o la sociedad administradora a la que esté afiliado el solicitante, ya que al ser un servicio esencial en materia de seguridad social, su prestación no puede estar supeditada al pago que haga el interesado, pues este criterio elude el principio de solidaridad al cual están obligadas las entidades de seguridad social.

También y sobre los derechos reclamados, aplicaremos el criterio recientemente expuesto por el Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio (Meta), Sala Primera (1ª) de Decisión de Asuntos Penales Para Adolescentes en fecha 21 de mayo de 2024, con ponencia del Magistrado **CESAR AUGUSTO BRAUSÍN ARÉVALO**, dentro del proceso con radicado número **50001-31-18-002-2024-00035-01**, precisó:

*“Con relación a las respuestas emitidas, la Sala advierte que el requerimiento efectuado corresponde a una traba administrativa para que la aseguradora cumpla con su obligación legal de realizar una primera valoración y un impedimento para que la accionante tramite su reclamación de indemnización por incapacidad permanente que cubre el **SOAT**.”*

En similar asunto, la Corte expuso:

*“En este mismo sentido, para la Sala no resulta admisible el argumento de la accionada presentado en la impugnación del fallo de primera instancia según el cual, antes de acudir a la Junta de Calificación la accionante debe haber culminado los procesos de rehabilitación integral y haber agotado el trámite ante la **EPS o ARL** a la cual se encuentre afiliado (artículos 29 y 30 del Decreto 1352 de 2013). Con ello Seguros Mundial olvida que lo que pretende la accionante es acceder a la indemnización por incapacidad permanente que cubre el **SOAT**. Por lo tanto, la situación está regulada en el Decreto Ley No 663 de 1993, en el título II*

del Decreto No 056 de 2015 y el decreto 780 de 2016, normas según las cuales la solicitud de indemnización por incapacidad permanente ocasionada por un accidente de tránsito debe incluir, entre otros, un dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral emanado de la autoridad competente de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 de decreto ley 019 de 2012, y, se reitera, las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte son una de las entidades competentes para el efecto (...) 15

Efectivamente, debido a las características del accidente del que resultó víctima el peticionario, -pues no se olvide que se trata de un riesgo asumido por la compañía aseguradora accionada- y conforme a las normas que regulan el **SOAT**, no existe la previsión de los documentos y/o conceptos pedidos por **LA PREVISORA S.A.**, para calificar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y/o asumir los costos que sean necesarios para tramitar la solicitud de indemnización por incapacidad permanente; por tanto debe la accionada proceder de conformidad sin requerir documentos adicionales, como el alta médica, certificación de que no se cuenta con tratamientos pendientes, máxime si la actora informa que no cuenta con mas documentos que los aportados.

De otra parte, la impugnante aduce que no está a su cargo asumir el costo de ellos honorarios en mención para surtir las controversias que surjan con ocasión de la emisión del dictamen de **P.C.L.**, no obstante, se estima que, contrario a su dicho, le asiste tal obligación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41 de la ley No 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del decreto ley No 019 de 2012 y la línea jurisprudencial anteriormente citada, pues **LA PREVISORA S.A.**, tiene el deber en una primera oportunidad de determinar la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez de la accionante, y agotada esta primera oportunidad, y en caso de existir alguna inconformidad en la calificación del grado de invalidez o pérdida de capacidad, la parte afectada podrá solicitar ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez que se pronuncie, y de ser impugnado el respectivo Concepto Técnico, corresponderá a la Junta Nacional de Calificación de invalidez decidir sobre la misma, debiendo la mencionada entidad sufragar los costos de los honorarios de las Juntas de Calificación de invalidez en caso de que tales decisiones sean impugnadas.

Finalmente, para la Sala, no está en discusión el derecho que le asiste al tutelante en esta acción a que la Aseguradora accionada emita el dictamen y/o asuma los costos que sean necesarios para llevar a cabo para tramitar la solicitud de indemnización por incapacidad permanente amparada por la póliza **SOAT**; máxime si se advierte, que la accionada no acreditó que la actora tuviere recursos para sufragar los honorarios de las juntas, quien, dicho sea de paso, afirmó no contar con ellos."

En conclusión, el accionante **MIGUEL FERNEY LEYTON CÉSPEDES**, cumple cabalidad con los requisitos establecidos en la ley y en la sentencia T-003 de 2020, para acceder a la evaluación ante la **Junta Interdisciplinaria Médica de LA PREVISORA S.A.**, o ante la **Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta**, quienes actúan como **peritos** y califican el grado de invalidez (pérdida de capacidad laboral, minusvalías, discapacidades, deficiencias globales, invalidez, origen, y fecha de estructuración de la misma), luego no son de recibo los argumentos presentados por la entidad accionada, en el sentido de negar el pago de la prestación señalada, so pretexto de que el accionante no demostró encontrarse en una especial imposibilidad económica para financiar un dictamen ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez.



Por lo tanto, corresponde a la aseguradora con la que se haya suscrito la respectiva póliza, cumplir su obligación legal y constitucional con la víctima, como lo es, la de efectuar la primera calificación y, en caso de inconformidad u apelación, lo honorarios que implique el acceso a las juntas de calificación.

De tal suerte, es posible afirmar que **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS** ha vulnerado los derechos fundamentales seguridad social, igualdad y a la salud del accionante al negar la valoración en primera oportunidad, así como, al negarse a asumir los honorarios ante la Junta de Calificación de Invalidez, máxime cuando el afectado ha visto comprometida la realización de sus actividades cotidianas debido a las lesiones que ocasionó el accidente de tránsito.

Corolario a lo referido, se tutelarán los derechos seguridad social, igualdad y a la salud del accionante, y se procederá a ordenar al representante legal de **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, que en el término improrrogable de siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, practique en primera oportunidad, el examen de pérdida de capacidad laboral al accionante, y en caso de existir alguna inconformidad en la calificación del grado de invalidez o pérdida de capacidad, deberá sufragar los honorarios del respectivo concepto ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez y, si este último es impugnado, deberá proceder de conformidad igualmente ante la Junta Nacional de Calificación de invalidez.

Sin más consideraciones, el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO EN VILLAVICENCIO (META)**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

## **R E S U E L V E**

**PRIMERO: TUTELAR** los derechos fundamentales a la seguridad social, igualdad y a la salud invocados por **MIGUEL FERNEY LEYTON CÉSPEDES**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: ORDENAR** al Representante Legal de **LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS** que en el término de siete (7) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta decisión, proceda a practicar en primera oportunidad, el

examen de pérdida de capacidad laboral al accionante **MIGUEL FERNEY LEYTON CÉSPEDES**, y que en el evento de que ese primer concepto sea objetado a través de inconformidad, la Aseguradora deberá sufragar los honorarios del respectivo dictamen ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez y, si este último es impugnado, deberá proceder de conformidad igualmente ante la Junta Nacional de Calificación de invalidez.

**TERCERO: NOTIFICAR** la presente decisión en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, advirtiéndole que contra esta decisión proceden los recursos de ley.

**CUARTO:** En caso de no presentarse impugnación, dentro del término señalado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, se remitirán las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**Firmado Por:**

**Maria Esperanza                      Torres                      Gonzalez**  
**Juez**  
**Juzgado De Circuito**  
**Penal 002 Adolescentes Función De Conocimiento**  
**Villavicencio - Meta**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**7b485008ea5f378aece76d83edac6ee6da939c31a2f63dcf95143590f549ee86**

Documento generado en 03/12/2024 02:25:20 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**